



ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Célula de Investigación:
Carpeta de Investigación:

CÉLULA III-4 CORDOBA
FED/VER/CORD/0005487/2019

En la Ciudad de CÓRDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, siendo las DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS, del día 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, el suscrito licenciado **RUBÉN DARÍO LÓPEZ RAMÍREZ**, Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación III, en Córdoba, Veracruz; procede a determinar:

RESULTANDO

PRIMERO: Que la presente carpeta de investigación se inició por el hecho delictivo previsto en el ARTÍCULO 223 FRACCIÓN VIGENTE HASTA DEL NOMBRAMIENTO QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA REALICE DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN. I.- TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE PARA SU BENEFICIO O EL DE UNA TERCERA PERSONA FÍSICA O MORAL, DISTRAIGA DE SU OBJETO DINERO, VALORES, FINCAS O CUALQUIER OTRA COSA PERTENECIENTE AL ESTADO O A UN PARTICULAR, SI POR RAZÓN DE SU CARGO LOS HUBIERE RECIBIDO EN ADMINISTRACIÓN, EN DEPÓSITO, EN POSESIÓN O POR OTRA CAUSA; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; con motivo del escrito de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, representante legal de la Universidad Politécnica de Huatusco, mediante el cual señala hechos probablemente constitutivo de delito, ocurrido en la zona centro de Veracruz, de la cual manifiesta: *"...De las irregulares de carácter contable y financiero detectadas en la revisión de la cuenta bancarias con la cual fueron operados los convenios federales celebrados mediante contrato número CNBV/005/18 con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV y contratos número DGAF/DGAPIF/05/2018 con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales INDAABIN, ambos contratos fueron operados por el Dr. Juan Carlos Moreno Seceña, reactor de la universidad en el periodo 16 de febrero al 17 de diciembre de 2018..."*

SEGUNDO.- Atento a lo anterior y a fin de determinar si se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito, así como para determinar la probabilidad del imputado **quien o quienes resulten responsables** en la comisión o participación del hecho delictivo, se realizaron diversos actos de investigación, que a continuación se describen:





1. Acuerdo de inicio de fecha trece de diciembre de dos mil diecinueve.
2. Informe de Investigación criminal con número de oficio FGR/CMIAIC/PFM/DGMMJ/UAIORVER/CORD/1587/2020, de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte.
3. Declaración ministerial del imputado Juan Carlos Moreno Seceña de tres de junio de dos mil veintiuno.
4. Declaración ministerial del imputado Ricardo Abraham Gonzalez Jácome, de tres de junio de dos mil veintiuno.
5. Declaración ministerial del imputado Oscar Jiménez Campos, de tres de junio de dos mil veintiuno.
6. Escrito de declaración del C. Oscar Jiménez Campos, de quince de junio de dos mil veintiuno.
7. Escrito de declaración del C. Juan Carlos Moreno Seceña, de quince de junio de dos mil veintiuno.
8. Escrito de declaración del C. Ricardo Abraham González Jácome, de quince de junio de dos mil veintiuno.
9. Declaración ministerial del imputado Eduardo Carreón Muñoz, de once de octubre de dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el suscrito agente del Ministerio Público de la Federación es competente para determinar sobre el No Ejercicio de la Acción Penal, esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 102, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 127 al 131, 255 en relación con el diverso 327 fracción V, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SEGUNDO: Que en estricto apego al deber de objetividad en la investigación, que establece el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la presente determinación se llevará a cabo el análisis de los actos de investigación conducentes al esclarecimiento del hecho delictivo puesto en conocimiento, en términos del artículo 12





de la Ley Orgánica de la Institución, dejando a salvo las facultades y atribuciones del Órgano Interno de Control, previstas en el artículo 34, de la referida Ley Orgánica.

TERCERO: Para efecto de determinar si en esta etapa del procedimiento penal se podrá decretar el No Ejercicio de la Acción Penal por el supuesto **agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación**, a favor de QUIEN RESULTE RESPONSABLE; se toma en cuenta el artículo 255 de la norma adjetiva de referencia que a la letra dice:

“... Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código...”

En tanto el diverso 327, señala:

“... El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto.

El sobreseimiento procederá cuando:

- I. El hecho no se cometió;
- II. El hecho cometido no constituye delito;
- III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;
- IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal;
- V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;**
- VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley;
- VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso;
- VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado;
- IX. Muerte del imputado, o
- X. En los demás casos en que lo disponga la ley.

De las anteriores transcripciones se advierten tres condiciones para que el Ministerio Público pueda decretar el no ejercicio de la acción penal, que son:

- a) *Que se decrete antes de la audiencia inicial;*
- b) *Que de los antecedentes del caso permitan concluir el caso a través del no ejercicio de la acción penal, cuando se actualice alguna de las*





hipótesis previstas en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

- c) *La extinción de la acción penal por algunos de los motivos establecidos en la ley.*

Atento al inciso c) que antecede es ineludible mencionar que nos encontramos ante una de las causas de extinción de la acción penal, de las que se establecen en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo a continuación se transcribe para un mejor proveer:

“Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal

La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas:

- a) Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;*
- b) Muerte del acusado o sentenciado;*
- c) Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia;*
- d) Perdón de la persona ofendida en los delitos de querrela o por cualquier otro acto equivalente;*

[...]”

La primera condición se encuentra colmada en virtud que hasta la fecha, no se ha solicitado audiencia inicial dentro de esta carpeta de investigación, como tampoco se estima necesario llevar a cabo los actos previstos en el artículo 307 de la norma adjetiva por las razones que se expresan en el cuerpo de la presente determinación, en ese sentido resulta procedente terminar la presente investigación a través de un no ejercicio de la acción penal.

En lo que refiere a la segunda condición se cuenta colmada, en primer término debido a que la presente carpeta se inició con motivo del escrito de fecha 07 de noviembre de 2019, suscrito por el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, representante legal de la Universidad Politécnica de Huatusco, mediante el cual señala hechos probablemente constitutivo de delito, ocurrido en la zona centro de Veracruz, de la cual manifiesta: “...De las irregulares de carácter contable y financiero detectadas en la revisión de la cuenta bancarias con la cual fueron operados los convenios federales celebrados mediante contrato número CNBV/005/18 con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV y contratos número DGAF/DGAPIF/05/2018 con el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales INDAABIN, ambos contratos fueron operados por el Dr. Juan Carlos





Moreno Secaña, reactor de la universidad en el periodo 16 de febrero al 17 de diciembre de 2018.

Ahora bien, al realizar un estudio lógico jurídico de todas y cada una de las constancias que integran la presente carpeta de investigación, el suscrito considera que en la especie se actualiza la hipótesis señalada en el artículo 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación, en virtud de que una vez analizada la presente carpeta de investigación, a criterio del suscrito nos encontramos ante un caso de atipicidad, debido a lo siguiente: El denunciante expresa que servidores públicos de la universidad politécnica de Huatusco realizaron convenios en los cuales aparentemente se originaba un quebranto o un desvío de recursos hacia terceros. Criterio que no se comparte en base a lo siguiente: El tipo penal establece para su configuración los siguientes elementos: **primero** que el activo sea un servidor público, situación que en lo particular si se acredita conforme a lo establecido en el numeral 212 del Código Penal Federal, **segundo** que dicho agente activo distraiga para su beneficio dinero, valores, fincas o cualquier otra pertenencia del estado, si los hubiera recibido en administración, sobre este punto, es el que específicamente no se acredita ya que dentro de las facultades que tienen los rectores, pueden suscribir contratos de prestación de servicios, con la finalidad de promover la calidad de trabajo de la universidad sin que esto sea considerado como una situación irregular, sobre el particular, el señor Eduardo Carreón Muñoz, fue quien suscribió los contratos o convenios para efectos de proporcionar servicios a la Comisión Nacional de Valores, así como al Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales INDAABIM, esta situación se encuentra ajustada al marco legal de la propia universidad y si bien es cierto, se adolece de los porcentajes de ganancia marcados en dichos convenios, dichos contratos cumplen con las especificaciones que marcan las regulaciones de la materia, esto es, las civiles y respecto al dinero que recibieron con motivo de dichos convenios también se encuentran ajustados a los lineamientos establecidos ya que dentro de las facultades de la misma universidad esta recibir ganancias por los convenios realizados, pero ojo, la particular queja del denunciante es, el porcentaje de ganancia recibido y la necesidad de pago al seguro social de los trabajadores que cumplieron dichos convenios; en ambos casos, no hay distracción económica, por el contrario, se reitera es facultad de poder realizar algo y lógicamente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por esa facultad o a través de esa facultad, como consecuencia de eso se estima que en ningún momento existió o existe por parte de alguno de los servidores públicos denunciados, desvío de recursos respecto a la celebración de los convenios o contratos ya mencionados, ya que las ganancias aunque mínimas si fueron a parar a las arcas de la Universidad Politécnica de Huatusco.

Por otro lado, respecto al hecho relacionado con la transferencia de dinero vía banca electrónica Spei a la cuenta del ex servidor público Oscar Jimenez Campos, de las constancias que integran la carpeta de investigación, se observa que dichas transferencias fueron realizadas con posterioridad a la fecha del término de la encomienda que como servidor público tenia, por lo tanto, jurídicamente existe la





imposibilidad de que dicho servidor público pudiera haber realizado las transferencias a cuenta a su favor si ya no tenía acceso a las instalaciones y lógicamente a las cuentas de la universidad, máxime que incluso, como de la propia denuncia se denota el señor Oscar, al momento de percatarse de la situación mencionada inmediatamente restituye los bienes económicos a la universidad, como consecuencia de esto, se observa que por parte del señor Oscar Jimenez Campos, no hubo acción dolosa en dicha circunstancia, ya que quien legalmente se encontraba en funciones y con la potestad para autorizar dichas transferencias bancarias al momento en que ocurrieron las mismas, era el propio denunciante Erick Sanchez Ibáñez, en su calidad de rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, por lo anterior, el suscrito reitera que nos encontramos ante un caso de atipicidad, en primer término porque las ganancias de los convenios, pasaron a formar parte de las arcas de la universidad, es decir no fueron distraídas en beneficio propio o de un tercero y los pagos que se erogaron, derivan del cumplimiento de acuerdos legales realizados conforme a la materia civil y por cuanto hace la transferencia económica existe ausencia de conducta por parte de quien pretende sea el agente activo ya que, para cuando fueron efectuadas las mismas, el ya no era servidor público y quien se encontraba en funciones era una persona diferente. Por lo anterior, se decreta el no ejercicio de la acción penal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 fracción II, en concordancia con lo que predispone el **artículo 327 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales**, agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación.

En ese orden de ideas, es evidente que no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hacer lo contrario violaría flagrantemente lo establecido por el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Por lo que, lo procedente es consultar dentro de la presente carpeta de investigación el No Ejercicio de la Acción Penal, previsto por el artículo 255 en relación con el 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, al Delegado Estatal de la Institución para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo; por otra parte, no deberá notificarse al denunciante en virtud de que se trata de elementos de la Policía en ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 127 al 131, 255 en relación con el 327 fracción V, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; acuerdo A/006/92 y la Circular C/005/99, todos del Procurador General de la República; es de acordarse y se:

RESUELVE

PRIMERO.- Se decreta el no ejercicio de la acción penal por el hecho delictivo previsto en el ARTÍCULO 223 FRACCIÓN VIGENTE HASTA DEL NOMBRAMIENTO QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA REALICE DEL TITULAR DE





LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN. I.- TODO SERVIDOR PÚBLICO QUE PARA SU BENEFICIO O EL DE UNA TERCERA PERSONA FÍSICA O MORAL, DISTRAIGA DE SU OBJETO DINERO, VALORES, FINCAS O CUALQUIER OTRA COSA PERTENECIENTE AL ESTADO O A UN PARTICULAR, SI POR RAZÓN DE SU CARGO LOS HUBIERE RECIBIDO EN ADMINISTRACIÓN, EN DEPÓSITO, EN POSESIÓN O POR OTRA CAUSA; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

SEGUNDO.- Remítase la presente carpeta de investigación al Delegado Estatal de la Institución en Veracruz, Veracruz, para que, conforme a sus facultades, se sirva autorizar el no ejercicio de la acción penal, si así lo considera procedente, o en su defecto, señale las instrucciones correspondientes, a efecto de poder resolver conforme a derecho.

TERCERO: En consecuencia, esta Fiscalía de la Federación de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, llevará a cabo la notificación correspondiente por lo que hace a la determinación de No Ejercicio de la Acción Penal en el presente expediente.

Así lo determina y firma el licenciado Ruben Darío López Ramírez, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV del Equipo de Investigación y Litigación III, en Córdoba, Veracruz.

**AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
TITULAR DE LA CÉLULA IV DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Y LITIGACIÓN III EN CÓRDOBA, VERACRUZ.**

LIC. RUBÉN DARÍO LÓPEZ RAMÍREZ.

**"ESTA DETERMINACIÓN CORRESPONDE A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/VER/CORD/00005487/2019"**





FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Fiscalía General de la República

Célula de Investigación: **CÉLULA III-4 CORDOBA**
Carpeta de Investigación: **FED/VER/CORD/0005487/2019**
Oficio No: **CORD-EIL-E3C4-5039/2021**
Asunto: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
PARA DECRETAR EL NEAP.**

CÓRDOBA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, a 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

LIC. SIXTO CARLOS HERRERA JIMENEZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION
Y LITIGACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
P R E S E N T E.

En términos de los dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 255 y 327 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales; así como el numeral Tercero, fracción V, y Cuarto, inciso A), del Acuerdo A/173/16 emitido por el Procurador General de la Republica, modificado por los diversos A/074/17, A/081/17, A/007/18 y A/011/18, por el que se delegan en los servidores públicos que se indican, facultades previstas en diversas leyes publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2016; expongo a Usted lo siguiente:

Respetuosamente, solicito tenga a bien aprobar la consulta de no ejercicio de la acción penal propuesta dentro de la carpeta de investigación **FED/VER/CORD/0005487/2019**, en donde se investiga la probable comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 223 fracción I del Código Penal Federal, en contra de **QUIEN RESULTE RESPONSABLE** de su comisión; sin embargo, de los datos de prueba que han sido recabados evidencian que en el presente caso se actualiza la causal del sobreseimiento prevista en artículo 327 fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto por la valoración de los datos de prueba **quedó demostrado de manera fehaciente que no existe persona alguna a la cual se le pueda atribuir el ilícito en comento;** en razón de lo que me permito exponer a continuación:

De los datos de prueba que obran en los registros de la investigación, no se cuenta con alguno que acredite la participación de persona alguna en la comisión del ilícito que se investiga, por lo que no se actualiza la hipótesis delictiva, prevista y sancionada por el artículo 223 fracción I del Código Penal Federal.

No omito manifestarle que dicha consulta fue analizada por el licenciado César Octavio Sandoval Islas, agente del Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación III en Córdoba, Veracruz, por lo





que, si Usted tiene a bien otorgar su visto bueno al presente planteamiento, solicito que por su amable conducto se obtenga la autorización del C. Delegado Estatal para su determinación.

A fin de sustentar lo anterior y de que norme su criterio, me permito anexar el acuerdo a través del cual, de otorgarse la autorización, quien suscribe decretará el no ejercicio de la acción penal en la precitada carpeta de investigación, conforme a los argumentos jurídicos y fundamentos legales que se hacen valer.

Sin más que tratar, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

PROPUSO

LIC. RUBÉN DARÍO LÓPEZ RAMÍREZ.
Agente del Ministerio Público de la
Federación, Titular de la Célula IV del
Equipo de Investigación y Litigación III
en Córdoba, Veracruz.

ANALIZÓ

LIC. CÉSAR OCTAVIO SAONDOVAL
ISLAS.
Agente del Ministerio Público de la
Federación, en funciones de Fiscal en
Jefe del Equipo de Investigación y
Litigación III, en Córdoba, Veracruz.

APROBÓ (Vo. Bo.)

LIC. SIXTO CARLOS HERRERA JIMÉNEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN EN EL
ESTADO DE VERACRUZ.

AUTORIZÓ

LIC. GONZALO MEDINA PALACIOS
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL
ESTADO DE VERACRUZ.

ESTA FOJA PERTENECE A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/VER/CORD/0005487/2019

